

REFORMAS Y DESARROLLO

David Ibarra
28 de junio de 2013
El Universal

El desarrollo económico de México ha sido débil desde principios de la década de los noventa y aún antes. La tasa media de crecimiento apenas alcanza el 3.2% anual con una pérdida paulatina de dinamismo. Si se toma el periodo 1990-2000, la expansión alcanza el 3.43% anual, pero después (2000-2012) baja al 2.21%, pese a que en ese último lapso se completan y afianzan las reformas esperanzadoras de la desregulación económica y la liberación de mercados.

En efecto, se privatiza el grueso de las empresas públicas, se abren las fronteras y se firma el tratado de libertad de Comercio con los Estados Unidos y Canadá, se eliminan la represión financiera interna, tanto como las restricciones al flujo foráneo de capitales; se otorga autonomía al Banco de México; la banca de desarrollo queda limitada a realizar operaciones de segundo piso, se reprivatiza la banca y luego se rompen las barreras legales a su extranjerización.

Tal cúmulo de reformas causaron reacomodos sin cuento que llevaron a descuidar el desarrollo y la distribución del bienestar social, en la creencia que los mercados atenderían automáticamente esas cuestiones. La preocupación por eliminar la inflación del Banco de México, desplazó y desplaza el interés por los objetivos macroeconómicos de crecimiento y de las políticas de aliento a la formación de capital y al financiamiento de la producción.

Quiérase o no, la caída de la expansión del producto, está asociada a la pérdida de dinamismo del crecimiento de los acervos de capital fijo. La inversión sube a razón del 7.73% real por año entre 1950 y 1980, al 3.65% de 1990 a 2000 y sólo el 2.21% entre ese año y 2012. Desde los años ochenta, la inversión pública decae dramáticamente del 7%-10% del producto al 3%-4%; la inversión privada se elevó trabajosamente del 13%-14% del producto al 15%-17%. Los flujos extranjeros descienden del 2%-3% al 1%-1.5% del mismo producto.

En suma, la formación de capital en México detuvo su impulso histórico a elevarse como proporción al producto cuando pasó del 11% al 24% entre 1940 y 1980 para luego estancarse entre el 19% y el 21%-22%. América Latina tradicionalmente ha sido una región que destaca poco por la intensidad de su formación de capital. México tampoco se distingue en la materia y sus cifras comparan mal con muchas economías en desarrollo, incluidas algunas de la región que alcanzan coeficientes de inversión del 25% o más del producto. En efecto, mientras en México el esfuerzo capitalizador oscila en torno a las cifras señaladas, alcanza el 33% en Indonesia, el 32% en Perú, el 30% en India, el 28% en Australia, el 24%-27% en Canadá, Chile y Colombia y el 45% en China. Más aún, sus componentes nacionales cayeron del 80% al 69% entre 1990 y 2012 y otro tanto ocurre con el segmento de maquinaria y equipo que se contraen del 26% al 14%, sin que la mayor importación hubiese elevado la productividad.

En particular, la caída del esfuerzo inversor público, diluyó la prelación hacia actividades proveedoras de insumos difundidos o generadoras de economías externas, integradoras de los nexos de empleo y producción, como las comunicaciones, el abasto de energía, la irrigación o la fabricación de bienes de capital. En efecto, el menor crecimiento de la economía, aparejado al inevitable ascenso de las necesidades de la población, forzaron el incremento del gasto social en detrimento de la inversión del gobierno.

En las circunstancias descritas, si no se amplía, mejora, la reducida y dispareja dotación de instrumentos de trabajo y la infraestructura para la producción, si no se reducen los excedentes de mano de obra --que no absorbe el segmento moderno de la economía-- y si no se corrige el lastre de un sector informal desproporcionado, --60% de mano de obra--, parece difícil elevar la productividad como remedio al lento crecimiento y a los rezagos competitivos.

Por segunda vez en poco tiempo se promueve un complejo conjunto de reformas creando un clima de cambio semejante al que privó entre los años 1982 y 2000. Los objetivos de la primera oleada de transformaciones buscaron adaptar al

país a la globalización internacional, los de la segunda quizás se orienten a humanizar y enmendar los vacíos y desequilibrios de la primera.

Sin embargo, muchas de las nuevas reformas en gestación, estando en principio justificadas, no se dirigen a satisfacer demandas apremiantes de la población, a destrabar los problemas más álgidos de la inversión y del empleo, si se exceptúan quizás y dependiendo de su contenido, las relacionadas con los sistemas impositivo y del crédito. El resto de las propuestas, aparte de desgastar inevitablemente capital político escaso, quedan cortas en dar respuesta a las expectativas de mejoramiento social después de 30 años de cuasi-estancamiento económico. Además, han surgido diversos problemas --descenso del ritmo de crecimiento, ingresos públicos insuficientes, fuga de capitales, escollos para exportar-- que bien podrían crear trabas al esfuerzo reformista y poner en tela de juicio la bondad de su secuencia de instrumentación en el tiempo.

Las crisis recurrentes de la economía mexicana obedecían y obedecen a causas estructurales que no corrigió nuestra estrategia de desarrollo hacia afuera. En efecto, desde la década de los noventa, la balanza comercial --exportaciones, menos importaciones-- ha sido sistemáticamente negativa si se exceptúa el periodo de la depresión bancaria-cambiaria de 1995 a 1997 con la caída brutal del producto y, por tanto, de las importaciones. Asimismo, la balanza en cuenta corriente que incorpora los pagos de intereses y dividendos, sin excepción arrojó números rojos hasta acumular un saldo negativo de 250 mil millones de dólares entre 1990 y 2012, representativo aproximado del monto de la deuda externa pública y privada. Esa cifra enorme podría justificarse si la estrategia de desarrollo hacia afuera, hubiese acrecentado el crecimiento de la economía sobre su patrón histórico. Desafortunadamente ocurrió lo contrario como ya se ha visto.

No obstante, se ha aprendido, no sin costos, a suavizar o diferir los desajustes cambiarios mediante tres expedientes. Primero, se abandonó el régimen de tipo de cambio fijo por uno de carácter flotante, más flexible. Segundo, se abatieron los déficit de pagos, reduciendo el ritmo de ascenso del producto para deprimir la

importación de bienes y servicios. Por último, el Banco de México creó condiciones favorables --tasa de interés, revaluaciones cambiarias-- al influjo de capital golondrino de corto plazo.

Sin embargo, en conjunto, ese esquema de política resulta cada vez menos sostenible. El comercio mundial tiende a contraerse al instrumentar los países industrializados estrategias de austeridad o quitar estímulos a sus políticas contracíclicas. En el trasfondo, también está la fragmentación de la globalización en acuerdos bilaterales, regionales, de áreas de influencia y el inicio de estrategias de sustitución de importaciones en países importantes (China, Estados Unidos).

Sea como sea, en 2012, el incremento anual de las exportaciones nacionales se contrajo más del 60%; la inversión extranjera directa --contando reinversión de utilidades-- cayó de 21 mil (2011) a 13 mil millones de dólares. En contraste, los flujos golondrinos subieron de 46 a 73 miles de millones de dólares, creando riesgos a la estabilidad financiera del país frente a salidas masivas causadas por cambios en las condiciones financieras internacionales.

Por todas esas razones, ante la debilidad de la demanda interna, los pronósticos apuntan hacia persistencia de la caída del crecimiento de la economía. Hecho que pudiese dificultar políticamente el avance reformista que por fuerza dejará una secuela importante de grupos perdedores, aunque quizás el conjunto de la sociedad pudiera salir ganando.